

Valparaíso, veinte de octubre de dos mil veintitrés.

Visto:

Primero: Que, comparece Eduardo Muñoz Rivera, abogado por la parte demandante, en causa RIT N° O-21-2023 caratulada “Ochoa con Banco Santander Chile”, seguida ante el 2° Juzgado de Letras de Quilpué, quien recurre de nulidad en contra de la sentencia de fecha siete de julio del año en curso, que rechazó la demanda por despido injustificado y cobro de prestaciones.

Fundamenta el recurso de manera principal en la causal del artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, esto es, “Cuando sea necesaria la alteración jurídica de los hechos, sin modificar las conclusiones fácticas del tribunal inferior”. De manera subsidiaria, interpone la causal del artículo 477 del código sustantivo en relación con el artículo 161 inciso 2° del mismo cuerpo legal. Finalmente, simultáneamente con las anteriores, interpone la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con el artículo 172 del mismo cuerpo de normas.

En relación con los antecedentes de la demanda y contestación, sostiene que reclamó la causal de desahucio invocada para su despido, por ser improcedente, ya que en su calidad de agente de sucursal del Banco Santander de la ciudad de Quilpué, no tenía las calidades que exige el inciso 2° del artículo 161 del Código del Trabajo, esto es, poder para representar al empleador dotado al menos de facultades generales de administración, ni su cargo era de exclusiva confianza, no tenía facultades decisorias sobre la marcha del Banco, ni menos facultades de comprometer personal e individualmente su patrimonio o realizar de esa forma la gestión siquiera de su sucursal; pese a lo cual, erradamente el sentenciador estimó que el demandante era un trabajador de exclusiva confianza.

Segundo: Que, en relación con la causal principal invocada, esto es, aquella contemplada en el artículo 478 letra c) del Código del Trabajo, sostiene que la errada calificación jurídica de los hechos se plasma en el razonamiento vigésimo octavo del fallo impugnado, en el que el sentenciador concluye que el trabajador es de exclusiva confianza del empleador, carácter que emana de la naturaleza de los servicios.

Agrega, que no concurre ninguna de las circunstancias que la doctrina ha establecido para considerar que se está ante un trabajador de exclusiva confianza, por cuanto el demandante no podía de modo alguno comprometer el patrimonio del Banco, sino que sólo otorgar créditos de acuerdo a lo que el sistema le autoriza, facultades que debía ejercer con otros funcionarios, por lo que su poder estaba limitado al manejo de la sucursal, no del Banco y, en función de su cargo, está circunscrito a hacer cumplir las políticas de la institución en todas las áreas, sin intervenir de modo alguno en la fijación de esas políticas, ni individual ni colectivamente, citando jurisprudencia al efecto.

En consecuencia, del material fáctico establecido en la sentencia, no es posible calificar el cargo servido por el demandante, ni la naturaleza de los servicios de agente de la sucursal Quilpué del Banco Santander, como uno de exclusiva confianza, porque no participa de las políticas decisorias y sólo ejecuta aquellas que le imparte el Banco, restringiendo sus facultades a la sucursal donde se desempeña, las que deben ser ejercidas con otros funcionarios. En definitiva, los criterios jurídicos usados para la calificación no son los correctos, pues no se ciñe a lo sostenido por los tribunales de justicia ni tampoco por lo expresado por la doctrina.

Tercero: Que, conforme la causal de nulidad invocada, se debe analizar el ejercicio de subsunción efectuado por el sentenciador, esto es, si los hechos

establecidos en la sentencia tienen un correlato en la hipótesis legal de alguna norma jurídica que, en el caso de autos, corresponde al artículo 161 inciso 2º del Código del Trabajo, que regula el desahucio del trabajador.

Sobre este punto, el sentenciador se encarga de puntualizar que la hipótesis legal específica que aplicó es aquel desahucio de los trabajadores de exclusiva confianza, cuyo carácter de tal deriva de su naturaleza (razonamiento décimo octavo).

Cuarto: Que, los hechos establecidos en el razonamiento vigésimo cuarto del fallo cuestionado son los siguientes:

a) El cargo de Agente II, implica dirigir y administrar de forma eficiente y oportuna “la oficina o sucursal que el empleador le asigne”;

b) Eso implica orientarla al cumplimiento de las metas y demás compromisos comerciales de cada uno de sus integrantes en forma permanente, controlando o supervisando la aplicación de las Políticas de Riesgo y Riesgo Operacional, velando por la calidad y oportunidad del servicio hacia los clientes, y mejorando permanentemente la rentabilidad de dicha unidad, pero siempre conforme a las directrices, indicaciones e instrucciones que el empleador determine.

c) El Agente II debe planificar las estrategias y acciones comerciales que permitan generar oportunidades de negocios con organismos e instituciones públicas y privadas, estableciendo objetivos y controlando el cumplimiento de los mismos, respecto del personal a su cargo.

d) Es el responsable de la administración eficiente del personal o recursos humanos y financieros, efectuando controles y seguimiento de los compromisos adquiridos con sus jefaturas superiores.

e) También deberá asegurar el correcto uso de las herramientas comerciales por parte de su personal a cargo, específicamente: Terminal Financiero, Browser, Syseva, Intranet, Blanca y Gestión Dirigida, como de cualquier otra herramienta tecnológica que la empresa ponga a disposición de la Sucursal para el desarrollo de sus funciones.

f) Debe, asimismo, participar permanentemente en el Comité de Normalización y de Crédito de Riesgos, con la finalidad de estar en pleno conocimiento de las operaciones que se desarrollan al interior de su respectiva sucursal.

g) El agente ejerce el cargo máximo de la sucursal.

h) En el caso del demandante la sucursal se estructuraba en dos áreas, una comercial y otra operacional, y el jefe de servicios para algunas cosas era él, en otras dependía del territorial y del operacional.

i) Comercialmente, el agente puede otorgar hasta 40 millones de pesos, si es crédito de consumo, y si es hipotecario hasta cinco mil UF, previa evaluación de los clientes en el denominado “terminal financiero”, que determina si el agente puede o no atenderlos, es decir, si cumplen las condiciones para ser clientes bancarios.

j) En el área comercial se ve el cumplimiento de ventas, de metas, evaluación de créditos, cuentas corrientes, hipotecarios, lo que es supervisada por una cadena directiva la primera línea por los ejecutivos de cuentas administrados por el jefe de sucursal y éste por un agente zonal y más arriba un gerente territorial. Por ello, el demandante como agente administraba el cumplimiento de metas, supervisaba la labor del ejecutivo de acuerdo a lo que Banco establece diaria y mensualmente. Eso a través de reuniones que pueden ser semanales o diarias remotas, telefónicas video llamadas, ese control es diario, semanal, mensual.

Quinto: Que, tales hechos son analizados por el sentenciador a partir del razonamiento siguiente (vigésimo quinto), comenzando por traer a colación la

circunstancia de que fue el propio actor quien reconoció en estrados ser un trabajador de exclusiva confianza del empleador, lo que sabía desde que firmó un poder y por aparecer en el contrato de trabajo.

Luego, en el razonamiento vigésimo sexto, agrega que el demandante ejercía el cargo máximo de la sucursal; que tiene facultades para otorgar créditos de hasta 40 millones si es de consumo y hasta UF 5.000 si es hipotecario; está a cargo de los ejecutivos comerciales; tiene el liderazgo de la sucursal y de la parte comercial de la oficina; y si bien no tiene la clave de la bóveda, el jefe de operaciones o el tesorero son quienes se la abren cuando el agente quiere entrar.

En el razonamiento siguiente (27º) sostiene que “...*parece absolutamente compatible con ese estado de cosas que fuese él quien debía planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de su establecimiento, para el cumplimiento de los fines de la organización, y la consecución de los resultados que le eran requeridos.*”, para luego agregar “*Todos estos alcances derivan, precisamente, de lo tantas veces dicho: El cargo o función del demandante implicaba “...dirigir y administrar de forma eficiente y oportuna la oficina o sucursal que el empleador le asigne a cargo...”, quedando de manifiesto de la sola lectura del contrato de trabajo del jefe de operaciones sr. Miranda Calderón, que su función principal era notoriamente más restringida (“Visar o validar los expedientes comerciales de la sucursal”), y con una remuneración ostensiblemente inferior a la del demandante.*”

Sexto: Que, en consecuencia, los hechos asentados dan cuenta de la naturaleza de los servicios prestados por el actor, reuniendo algunas de las circunstancias que la propia doctrina ha planteado para reconocer si se trata de un trabajador de exclusiva confianza, ya que -entre otras- tiene facultades para comprometer a la empresa o la responsabilidad del empleador, al otorgar créditos por montos individuales que, en el caso de los hipotecarios al día de hoy podrían alcanzar los \$180.000.000, permitiendo concluir que no se trata de un trabajador cualquiera, sino uno revestido de especiales facultades y con un liderazgo asignado en varias áreas críticas de su unidad de trabajo (determina la estrategia y efectúa la planificación para lograr las metas), encargado de cuidar los bienes materiales de su empleador puestos a su cuidado y realizar funciones que por su naturaleza no pueden encomendarse a cualquier persona, de donde surge que el ejercicio de subsunción llevado a cabo por el sentenciador, no resulta errado, lo que conlleva el rechazo de esta causal.

Séptimo: Que, de manera subsidiaria, el articulista funda su recurso de nulidad en la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con lo dispuesto por el artículo 161 inciso 2º del mismo cuerpo legal, esto es, infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que en su concepto, la sentencia aplica esta norma a hechos que no caben en la esfera de su regulación, pues el demandante no desempeña un cargo de exclusiva confianza cuyo carácter emane de la naturaleza de los servicios, ni tampoco tenía facultades generales de administración, debiendo además aplicar la norma de manera restrictiva, puesto que el sistema de terminación de la relación laboral es de “estabilidad relativa”, por lo que se debe expresar la causal legal y ella se sujeta a una revisión judicial, manteniendo el libre desahucio restringidamente para algunos trabajadores especiales.

Octavo: Que, de los fundamentos expuestos por el recurrente para sostener su arbitrio, no se advierte cuál es la violación efectuada por el sentenciador al artículo 161 inciso 2º del Código del Trabajo, ya que si el vicio consiste en que se aplica la norma a hechos que no se encuentran bajo su regulación o que debe aplicarse de manera restrictiva, en cualquier caso se trata de un problema de subsunción, no de infracción de ley, por lo que queda fuera de la causal invocada, correspondiendo a una argumentación semejante a la

causal anterior deducida de manera principal, por lo que ha de estarse a lo ya argumentado en tal sentido, lo que conduce al rechazo de la causal subsidiaria.

Noveno: Que, de manera simultánea con las anteriores causales, se alega la nulidad de la sentencia de conformidad con la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo, ya que conforme argumenta el recurrente, el sentenciador al resolver lo demandado por concepto de diferencias de indemnización del artículo 162 inciso 4º del Código del Trabajo y la indemnización convencional por años de servicio, lo hace infringiendo lo dispuesto por el artículo 172 del mismo Código, por cuanto altera el tenor literal de la misma, al confundir una remuneración variable, de lo que es una esporádica, con lo que se afecta la base de cálculo de las indemnizaciones señaladas.

Agrega que la sentencia reconoce que el contrato colectivo contempla una cláusula (10ª) que fija la base de cálculo del pago de las indemnizaciones a pagar al término de la relación laboral que es idéntica al mencionado artículo 172, por lo que el premio o bono “win win” no está incluido en las excepciones de este último artículo, ni en el contrato colectivo para excluirlo de la base de cálculo, pues se trata de un beneficio que requiere condiciones para su devengamiento que lo hacen variable, pero es pagadero trimestralmente, por lo que es periódico.

Sostiene que también vulnera el artículo 1545 del Código Civil, ya que todo contrato legalmente celebrado es ley para los contratantes, en relación con la cláusula 10ª del Convenio Colectivo, relativo a los estipendios que se deben considerar para el cálculo de la indemnización por años de servicios.

Décimo: Que, respecto de la base de cálculo para las indemnizaciones que se mencionaron anteriormente, el sentenciador entrega en el razonamiento trigésimo quinto de la sentencia en estudio -luego de transcribir el finiquito suscrito por la demandante- los siguientes argumentos:

“Este aserto, no contradicho ante estrados, da cuenta de que la indemnización por años de servicio convenida, es notablemente superior a la pactada contractualmente. De esa suerte, aun si el pacto colectivo hubiese alterado la base de cálculo del artículo 172 del Código Laboral, al haberse pagado una indemnización superior a la legal, debe reconocérsele valor.

Tampoco tiene sentido, en esta misma perspectiva, signar diferencias en la indemnización convencional acordada, pues si así se estableciese, se vulneraría esa voluntad colectiva, ya tantas veces aludida, y que decidió por esta fórmula holística, teniendo presumiblemente a la vista su favorable carácter”.

De donde se desprende que el sentenciador no aplica las normas supuestamente infringidas, ya que concluye que la indemnización pagada en los hechos al actor, es superior a la que le correspondía legalmente, por lo que privilegió este acuerdo directo entre las partes, ya que confiere derechos al trabajador superiores a los mínimos establecidos por la legislación laboral, lo que permite descartar la supuesta infracción de ley cometida por el juez a quo.

Undécimo: Que, respecto de la base de cálculo de la indemnización contemplada en el artículo 161 inciso 2º del Código del ramo (denominado comúnmente “mes de aviso”), por una parte sostiene que es el propio artículo citado el que se encarga de regular la base de cálculo al establecer que debe ser “...equivalente a la última remuneración devengada”, por lo que nuevamente, no es el artículo 172 el que resuelve el asunto. Por otra parte, también descarta la aplicación del convenio colectivo, ya que este último regula la indemnización por años de servicio, pero no así la mencionada “mes de aviso”, con lo que tampoco se infringe el artículo 1545 del Código Civil, lo que justifica rechazar la nulidad impetrada.

En mérito de lo razonado y lo dispuesto en los artículos 478, 481 y 482 del Código del Trabajo, se resuelve que **se rechaza** el recurso de nulidad deducido por el abogado Eduardo Muñoz Rivera, en representación de la parte demandante, en contra de la sentencia de fecha siete de julio de dos mil veintitrés, pronunciada en los autos RIT O-21-2023 del 2º Juzgado de Letras de Quilpué, la que en consecuencia no es nula.

Regístrese, comuníquese e incorpórese al sistema.

Redacción del Ministro Interino don Juan Carlos Maggiolo Caro.

Nº Reforma Laboral-583-2023.



Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso integrada por los Ministros (as) Suplentes Juan Carlos Francisco Maggiolo C., Ingrid Jeannette Del Carmen Alvial F. y Abogado Integrante Eduardo Morales E. Valparaiso, veinte de octubre de dos mil veintitrés.

En Valparaiso, a veinte de octubre de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

